

Ante la nueva Ley Penal Juvenil

Autor: Carlos Ganzenmüller Roig, Julio 1997.

El Código Penal de 1995, que nació prematuramente y se desarrolla algo desnutrido y dificultosamente, dejó en el aire una cuestión básica para todos los demócratas: La mayoría de edad penal a los 18 años.

Conseguida esta conquista sobre el papel, los trabajos preparativos a la discusión parlamentaria de la Ley deberían tener en cuenta, en mi opinión, una serie de postulados básicos que paso a enumerar:

1. En el tratamiento de la delincuencia de menores, no deben tenerse en cuenta los índices de aciertos o fracasos en la reinserción efectiva del menor, sino el garantizarles una oportunidad seria y profesional en el ámbito físico y cultural.

Por ello, la inversión en justicia juvenil es siempre rentable.

En este campo, como en ningún otro, conseguir enmendar la conducta de los menores en situación de riesgo a temprana edad evitará la consolidación de potenciales delincuentes. Un sólo éxito en la reeducación del menor puede representar una magnífica inversión a largo plazo, al evitarse un sinfín de actos delictivos futuros.

2. El tratamiento penal y procesal del menor delincuente tiene que ser unitario. Policía de Menores, Juzgado, Fiscalía y Equipos Técnicos, deberían ubicarse en un mismo espacio físico, evitando la peregrinación del menor de una sede a otra. Lo que impone, además, la efectiva especialización de jueces, fiscales, abogados y funcionarios de policía, pues sólo de su labor conjunta podrá darse satisfacción a la única finalidad de la Ley: el particular interés del menor.

3. La potenciación de los Equipos Técnicos en el control del menor sujeto a la medida de libertad vigilada, medida que tenderá a ser la sanción de mayor aplicabilidad por los Jueces de Menores, requerirá una preparación específica y muy profesionalizada.

4. La implicación de los padres o de los responsables efectivos del menor, siempre que sea posible, en los programas reeducativos, culturales y formativos, debe estar expresamente regulada, así como las medidas tendentes a la mediación y perdón entre el menor y la víctima.

5. Consideramos necesario mantener la instrucción de las diligencias en manos del Ministerio Fiscal, que ejerce en correcta contraposición a la función del Juez, velador del respeto a las normas procedimentales y último garante de los derechos individuales. Es conveniente la exclusión de las acusaciones particulares en defensa de los intereses de la víctima, dentro del marco sancionador, dada la finalidad exclusivamente reeducativa del procedimiento.

Finalmente, constatar que esta nueva Ley no puede admitir más espera. Su falta, de una parte, distorsiona gravemente el marco de aplicación de todo el derecho penal y de otra, no puede privarse por más tiempo a los menores de 18 años de una Ley que claramente les beneficiará y donde el futuro les pertenece.

Carlos Ganzenmüller Roig, es Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Gerona.